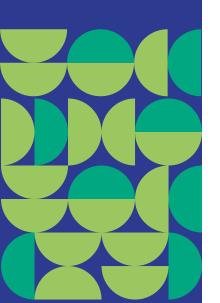
Perspectivas

Suplemento de Análisis Político





1. Estabilidad económica y dictadura a un alto costo social

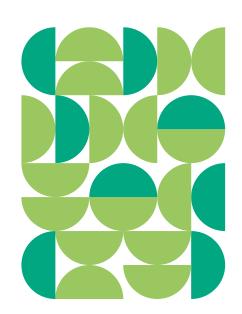
En Nicaragua, las crisis políticas siempre han estado acompañadas por crisis económicas. Una de las razones del declive del somocismo fue el uso abusivo del poder estatal en beneficio de su élite y los elevados niveles de corrupción, evidentes sobre todo después del terremoto de Managua de 1972. Ese enriquecimiento desmedido confrontó al grupo somocista con otros grupos económicos con consecuentes manifestaciones en el ámbito político.

Durante la década de 1980, la guerra civil, la aplicación de un modelo ajeno a la realidad socioeconómica del país, junto con errores y abusos en la gestión gubernamental, provocaron el colapso económico del país; mientras que entre 1990 y 2006, la aplicación de severos programas de ajuste estructural para estabilizar indicadores macroeconómicos, dejaron a un lado las graves consecuencias sociales en los sectores más vulnerables, generando una base social inconforme, receptiva al discurso populista del FSLN.

Durante dieciocho años de ejercicio autoritario del poder, el régimen Ortega-Murillo ha reproducido las prácticas del somocismo, utiliza al Estado para beneficio de su grupo económico familiar y ha tomado el control de sectores clave de la economía nacional. Todo ello a un alto costo social para el resto de la sociedad nicaragüense, particularmente de los sectores más empobrecidos.

Una prosperidad en duda

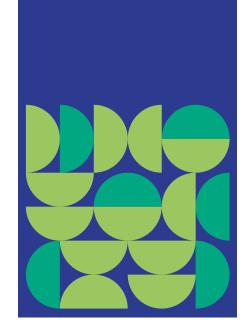
Desde que estalló la crisis política en 2018, la dictadura de los Ortega-Murillo ha sostenido un discurso en el que intenta achacar las dificultades económicas a los protestantes y las acciones; mientras sostiene un discurso triunfalista sobre las medidas que adopta en materia económica. Sin embargo, una revisión de indicadores clave muestra una realidad distinta.



Uno de ellos es el de la deuda externa. Según cifras oficiales, a junio de 2025 ascendía a 15,886.7 millones de dólares, equivalentes al 80.7% del PIB nacional, estimado en 19.694 millones. De acuerdo con el Banco Central, en 2006, la deuda cerró en 4,527 millones tras la condonación otorgada por la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda (MDI) y la de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), que redujeron hasta el 100% del endeudamiento. No obstante, hoy es improbable que surjan mecanismos similares. Y la deuda casi se ha cuadruplicado. Entre los nuevos deudores. China se ha convertido en uno de los más significativos durante los últimos dos años, con una deuda equivalente a unos 1.500 millones de dólares.

Ese gumento sostenido de la deuda afecta las finanzas públicas, especialmente por el peso que representan el servicio de los pagos, que en el primer semestre de 2025 absorbió alrededor del 16% de los ingresos tributarios, limitando la inversión social. Esto significa que para cubrir esos pagos, se tienen que aumentar las recaudaciones o reducir los gastos, dos medidas que terminan afectando a la población porque sobre ella recae el costo de esos pagos.

Las exportaciones son otro indicador clave, ahora afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos, su principal destino según el propio Banco Central. En 2024, las **Estados** exportaciones hacia Unidos alcanzaron 1,623.7 millones de dólares, representando el 38.7% del total, con 2,044.9 millones adicionales desde las zonas francas. El arancel impuesto por la administración Trump en abril pasado, asciende al 18% y entró en vigor a partir de agosto. La tasa es la más alta asignada a un país centroamericano y representa serias amenazas para la competitividad nacional porque podría generar un sobrecosto estimado en 582.5 millones de dólares anuales. En comparación, países con estructuras exportadoras similares, como Honduras y Guatemala, enfrentan gravámenes menores equivalentes al 10%, lo



que coloca a Nicaragua en desventaja competitiva y podría propiciar la reubicación de capitales.

Más informalidad, menos remesas y canasta básica más cara

En agosto de este año, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) reportó una tasa de ocupación del 97.8 % y un desempleo abierto del 2.2 %. En la población ocupada incluye a quienes generan ingresos en el sector informal estimado en más del 70%, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT); una estimación que distorsiona la realidad laboral de Nicaragua en un contexto de secretismo y escasa fiabilidad de los datos oficiales.

Según un informe de la Fundación Sin Límites, pese a señales de recuperación del empleo formal, los niveles actuales siguen por debajo de los previos a 2018. Las cifras del Banco Central confirman que entre marzo y agosto de 2025 el INSS perdió 12,168 afiliados; es decir, trabajadores que pasan al desempleo abierto o al sector informal.

La falta de oportunidades y de políticas económicas y sociales efectivas incentivan la informalidad como vía de subsistencia. aumentan la vulnerabilidad e inestabilidad laboral, los bajos ingresos y reduce el acceso a la seguridad social. A nivel macroeconómico, la alta informalidad restringe el desarrollo, afecta la productividad v el bienestar social. Reduce además la capacidad recaudatoria del Estado v por tanto, los recursos para inversión pública.

Las remesas constituyen un pilar fundamental de la economía y el motor del consumo interno. Junto con el sector informal, actúan como amortiauadores frente a la crisis estructural del país. En 2024, Nicaragua recibió 5,243.1 millones de dólares en remesas familiares, el equivalente al 26.62 % del PIB; más del 80 % (4,320.2 millones) provenían de Estados Unidos. Mientras, en el primer cuatrimestre de 2025 se registraron 1,943.1 millones por ese mismo concepto, incrementándose hasta representar el 33 % del PIB.

Esa tendencia tiene muchas probabilidades de variar por el efecto de las políticas migratorias aplicadas por el gobierno de Estados Unidos, y significarían una disminución de los flujos, según el análisis de especialistas en el tema. A ello se suma el impuesto del 1 % a las remesas establecido en EEUU, y tendrá vigencia desde

enero de 2026, lo que afectará los ingresos de miles de hogares nicaragüenses.

El peso de las remesas en la economía refleja buena medida la migración masiva desde el 2018, por causas tanto políticas como económicas y sociales. Cada envío representa alivio económico para las familias, pero también el gran drama de la separación familiar y el enorme esfuerzo de los que se van para sostener a sus seres queridos. Pero una economía sostenida en las remesas es estructuralmente vulnerable porque apenas permite subsistir, y depende de factores externos como ocurre en la actualidad.

En ese sentido, uno de los efectos económicos que permite valorar el impacto real de las políticas económicas más allá de las cifras macroeconómicas es la capacidad de la población para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y servicios.

Para agosto de 2025, el costo de la canasta básica se estimó en C\$20,530 córdobas, equivalentes a \$566.00 dólares al tipo de cambio del momento, mientras que el salario mínimo promedio fue de C\$8.930 córdobas, o \$243.82 dólares. La brecha entre el ingreso y el costo de vida es evidente, pues incluso dos salarios mínimos resultan insuficientes para cubrir las necesidades esenciales.



En 2024, Nicaragua recibió 5,243.1 millones de dólares en remesas familiares, el equivalente al 26.62 % del PIB; más del 80 % (4,320.2 millones) provenían de Estados Unidos. Mientras, en el primer cuatrimestre de 2025 se registraron 1,943.1 millones por ese mismo concepto, incrementándose hasta representar el 33 % del PIB.

El cálculo oficial de la canasta básica considera 53 productos destinados a una familia de cinco personas, aunque los hogares nicaragüenses suelen ser más numerosos. Según una reciente encuesta de CID Gallup, "cinco de cada diez personas reportan ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, y siete de cada diez consideran que el costo de vida ha aumentado con respecto a cuatro meses atrás". Estos datos constatan el deterioro del poder adquisitivo y la creciente inseguridad económica.

La política, el descontento, los aranceles y las tensiones gratuitas

La relativa estabilidad macroeconómica que ha mostrado la economía nicaragüense enfrenta amenazas potenciales, tanto políticas como económicas, que podrían agravar la situación de los sectores más vulnerables. En el ámbito político, la consolidación de la dictadura mediante la elevación a rango constitucional de su modelo autoritario ha anulado la división e independencia entre los poderes estatales, subordinándolos como "órganos" coordinados por la presidencia. El sistema judicial se encuentra paralizado desde octubre de 2023, tras su ocupación policial, generando un clima de incertidumbre que afecta directamente el entorno de los negocios y la seguridad jurídica.

En septiembre pasado, Estados Unidos advirtió a los inversionistas para que actúen con extrema precaución al invertir en Nicaragua, señalando que "los inversores no deben esperar una aplicación justa del estado de derecho ni un entorno empresarial predecible en Nicaragua". La continuidad de la represión, que incluye cada vez más confiscaciones de propiedades, refuerza un ambiente hostil tanto para la inversión extranjera como la nacional que ya dio muestras de una acelerada

tendencia decreciente, de manera que las inversiones extranjeras han disminuido notablemente entre 2024 y lo que va del 2025.

Entre la población, aunque la represión ha sofocado hasta ahora las manifestaciones de inconformidad, el descontento se ha extendido y profundizado, incluso entre la propia estructura de poder debido a las purgas, castigos y vigilancia; de manera que no puede descartarse la ocurrencia de nuevos estallidos sociales. Si bien hoy parecen improbables, no son imposibles.

El descontento acumulado, sumado a los bajos niveles de apoyo al régimen, obedece en gran medida al deterioro económico, expresado en el desempleo y el alto costo de vida. Conviene recordar que el estallido social de 2018 tuvo como detonante las reformas al sistema de seguridad social impuestas por el gobierno.

Por otro lado, la retórica confrontativa del régimen hacia Estados Unidos y su alineamiento con Venezuela, Rusia y China, no pasa inadvertida para la administración Trump. Nicaragua no figura entre sus prioridades inmediatas – al menos por ahora, pero las continuas y recientes declaraciones sobre la situación de los derechos humanos podrían anticipar nuevas medidas de presión. En este contexto, no es descartable que, a mediano plazo, Estados Unidos bloquee desembolsos financieros de organismos internacionales hacia Nicaragua, o apliquen nuevas sanciones.

Hasta el momento, los esfuerzos de la dictadura por amortiguar los efectos de la situación económica global por las políticas norteamericanas, la confrontación con China, el conflicto en medio oriente y la guerra en Ucrania, son mínimos. Tampoco se están adoptando medidas para atender los problemas económicos estructurales de Nicaragua y los que se han agravado por la prolongada crisis sociopolítica del país.

Por el contrario, los costos económicos del mal gobierno se los está cargando a la población, a los sectores más desfavorecidos, mientras preserva la riqueza y privilegios de su grupo económico familiar. El escenario de futuro inmediato no es halagüeño. El flujo de personas deportadas y retornadas desde Estados Unidos generará una mayor presión sobre el mercado laboral, incrementará el tamaño del sector informal y aumentará la demanda de servicios públicos; mientras que la fuga de cerebros y mano de obra calificada ya comenzó a hacer efecto en los sectores productivos más importantes.

Los aliados autocráticos de la dictadura solamente están generando deuda y expoliando a Nicaragua, pero no han contribuido a disminuir la brecha de apoyo financiero por la salida de importantes fuentes de financiamiento que cooperaban con el país. De manera que la aparente estabilidad macroeconómica que pregona la dictadura descansa sobre bases frágiles y un alto costo social.

Los regímenes que destruyen las libertades terminan restringiendo también el funcionamiento del mercado e interviniendo en la economía en favor de sus allegados. Por ello, la superación de los problemas económicos de Nicaragua solo será posible dentro de un marco democrático que restablezca la institucionalidad y el estado de derecho.

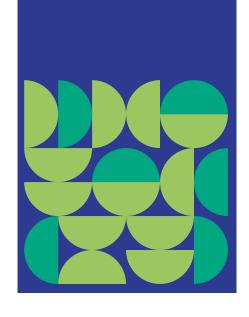
2. Voces locales

Las redes de corrupción instaladas a todos los niveles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han quedado al descubierto en diferentes municipios de Nicaragua. Los medios de comunicación independientes han informado sobre señalamientos de corrupción a funcionarios municipales, sus remociones e incluso detenciones. Públicamente se conocen al menos los casos de Masaya y León, pero en realidad se están efectuando purgas generalizadas en todas las localidades del país.

De acuerdo con activistas y ciudadanos en numerosos municipios se han ordenado supervisiones realizadas por equipos que llegan desde Managua cuyos resultados muestran los altos niveles de corrupción entre los funcionarios municipales, el nepotismo, la malversación de fondos y tráfico de influencias. Esta podría ser una buena noticia, sin embargo, el eje principal es que son prácticas corruptas instaladas sin autorización ni conocimiento del centro de poder; en ese sentido, los "castigos" y purgas tienen que ver más con la "desobediencia" de los implicados que con la corrupción en sí misma.

Las purgas en León son extendidas e incluyen al secretario político Evert Delgadillo, el jefe de policía Fidel Domínguez señalado de crímenes de lesa humanidad, además de funcionarios en otras alcaldías del departamento e incluso





jefes policiales. También han realizado despidos de numerosos médicos especialistas y enfermeras con muchos años de experiencia en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales (HEODRA). Mientras en otros municipios de Nicaragua, se han efectuado despidos y detenciones de magistrados y jueces. Una situación similar se ha presentado en Masaya y otros municipios del departamento.

En general, la población está observando las purgas y detenciones, aunque no se atreven a hacer comentarios públicamente. El temor se ha extendido entre los funcionarios municipales y de otras instituciones públicas porque saben que están bajo vigilancia permanente de personas que han contratado en todas las instituciones para que realicen esa tarea. Sienten que en cualquier momento pueden convertirse en sospechosos y sufrir las consecuencias de las purgas y encarcelamientos como los que se están efectuando.

Los cambios están sacudiendo toda la estructura de poder y eso incluye a las alcaldías, que han jugado un papel clave en la vigilancia y persecución sobre la población además de la ejecución de las directrices emanadas verticalmente desde la presidencia. Estos cambios son parte de la sucesión dinástica y la creación de una estructura leal a Murillo, de manera que en los puestos clave están ubicando personas de su confianza que aseguren la ejecución de sus órdenes al pie de la letra, mientras que los puestos menos relevantes los están dejando congelados.

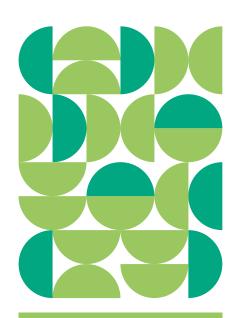
3. Un Nobel que sacude opiniones

Recientemente, a María Corina Machado le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz 2025. Entre los argumentos del Comité, destaca su valentía, larga trayectoria y empeño por alcanzar la democracia en su país, Venezuela, especialmente en el contexto de las pasadas elecciones presidenciales cuando una mayoría de venezolanos eligieron por los votos a Edmundo González.

En liderazgo de María Corina Machado fue fundamental durante la campaña porque logró movilizar a cientos de miles de ciudadanos que se lanzaron a las calles a pesar de la vigilancia y persecución del régimen encabezado por Nicolás Maduro que desconoció los resultados y se mantiene en la presidencia contra viento y marea. Posteriormente, Machado ha mantenido una voz permanente de denuncia e incidencia a pesar de que se encuentra en la clandestinidad, el presidente electo, en el exilio y muchas de las personas que apoyaron las actividades de la oposición, son perseguidas y encarceladas.

Después del anuncio, las opiniones se han dividido entre quienes reconocen el liderazgo de María Corina Machado y su lucha por la democracia en Venezuela, y quienes argumentan que había otras personas y organizaciones nominadas con más méritos para recibirlo. Otros más, han expresado su desilusión con el galardón y se han sumado a las críticas que recibe cada año. Uno de los grandes desencantados ha sido el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quería ser nominado y esperaba se le concediera el premio por, según alegó, sus numerosos e incansables esfuerzos por la paz en el mundo.

Más allá de las afinidades ideológicas y políticas, María Corina Machado es la representación de una buena parte de la población venezolana dentro y fuera del país que sufre la persecución del régimen de Maduro; también es la representación de las mujeres que se enfrentan al poder con valentía; y es la representación de quienes luchan en contra de dictaduras y autocracias por medios cívicos, en favor de la democracia.



Infografía

Voces locales

Se están efectuando purgas generalizadas en todas las localidades del país.



Supervisiones realizadas por equipos que llegan desde Managua cuyos resultados muestran los altos niveles de corrupción entre los funcionarios municipales, el nepotismo, la malversación de fondos v tráfico de influencias.

Las purgas en León:



Secretario político **Evert Delgadillo**



Jefe de policía **Fidel** Domínguez señalado de crímenes de lesa humanidad

- Funcionarios en otras alcaldías del departamento e incluso jefes policiales.
- Despidos de numerosos **médicos** especialistas y **enfermeras** con muchos años de experiencia en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales (HEODRA).
- En otros municipios de Nicaragua, se han efectuado despidos y detenciones de magistrados y jueces.

El **temor** se ha extendido entre los funcionarios municipales y de otras instituciones públicas porque saben que están bajo vigilancia permanente de personas que han contratado en todas las instituciones para que realicen esa tarea.

Estos cambios son parte de la sucesión dinástica y la creación de una estructura leal a Murillo, de manera que en los puestos clave están ubicando personas de su confianza que aseguren la ejecución de sus órdenes al pie de la letra, mientras que los puestos menos relevantes los están dejando congelados.

ISSN: 2953-7592

